



Jonathan Davis, Presidente de la CNBV

Discurso para la 69 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México

Acapulco, 24 de marzo de 2006

**Lic. Francisco Gil Díaz,
Secretario de Hacienda y Crédito Público**

**Dr. Guillermo Ortiz Martínez,
Gobernador del Banco de México**

**Lic. Marcos Martínez Gavica,
Presidente de la Asociación de Bancos de México**

Distinguidos miembros del Presidium

Señoras y señores:

Agradezco a la Asociación de Bancos de México la invitación que me han hecho para participar en su Sexagésima Novena convención anual, y felicito a Marcos Martínez por su reelección al frente de la Asociación, reiterándole la disposición que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para continuar manteniendo este diálogo constructivo que ha caracterizado la relación entre nosotros.

Durante estos últimos años, el sistema financiero mexicano se ha transformado radicalmente, y los problemas estructurales que afectaron a la banca durante la peor crisis financiera de nuestra historia contemporánea han quedado atrás. La banca es hoy fuerte y sólida, encontrándose en una posición privilegiada para poder contribuir de una manera eficaz a financiar el crecimiento de nuestra economía y por lo tanto, el desarrollo nacional.

Aprovecharé esta oportunidad para repasar con ustedes las medidas más relevantes que se han implementado en materia de regulación prudencial y mejores prácticas bancarias; los principales esfuerzos que hemos adoptado hacia el interior de la Comisión para mejorar los servicios que prestamos; así como algunos de los temas que deberán formar parte de nuestra agenda futura.

En cuanto a la supervisión y regulación de nuestro sistema, hemos dado especial importancia al desarrollo de normas que permitan a las autoridades detectar con oportunidad los problemas que aquejan a las instituciones de crédito, para poder remediar oportunamente tal situación, antes de que alcancen un punto crítico que las conduzca a su insolvencia.

De ahí, que el Congreso estará próximamente analizando una iniciativa que pretende modificar la Ley de Instituciones de Crédito, buscando complementar, entre otros aspectos, lo dispuesto en materia de acciones correctivas tempranas, al introducir mecanismos eficientes que permitan resolver la situación de bancos que caigan por debajo del índice de capitalización mínimo legalmente exigido, preservando así, el sistema y reduciendo la posibilidad de que pueda materializarse un riesgo de mayor escala.

Estas medidas adquieren una particular relevancia, en virtud del nuevo régimen limitado del seguro de depósitos bancarios que opera en nuestro país, a partir del año pasado.

En este mismo orden de ideas, se ha venido trabajando en el reforzamiento de lo que denominamos “red de seguridad complementaria”, mediante la prestación de servicios que ofrecen otros agentes que configuran nuestro mercado. Estos servicios le permiten al gran público estar mejor informado de la verdadera situación financiera, legal y operativa de los bancos.

Actualmente, contamos con burós de crédito que proporcionan información sobre el historial crediticio de las personas y las empresas, mismos que deben ser consultados obligatoriamente y de manera previa por los bancos al otorgar un nuevo financiamiento; las calificadoras de valores que ya cuentan con un código de ética que promueve la objetividad de las opiniones que emiten; los

organismos autorregulados que entre otras funciones, coadyuvan con las autoridades en la certificación de los funcionarios que actúan como apoderados frente al público; los auditores externos que se rigen con estrictos criterios de independencia en su actuar; los proveedores de precios que dan vectores para evaluar con precisión las posiciones de valores que toman los bancos; y los analistas que hacen su trabajo aislándolos de potenciales conflictos de interés en que pudieran incurrir.

En materia de combate al lavado de dinero y prevención del financiamiento al terrorismo, también se ha avanzado significativamente. Nuestro sistema financiero cuenta hoy en día con un marco jurídico que exige que todos los intermediarios tengan la infraestructura necesaria para detectar y reportar todas aquellas operaciones sospechosas, relevantes e inusuales, para poder así prevenir el potencial uso ilegal de nuestro sistema.

Con este propósito, también se han adoptado políticas para la identificación del cliente y del beneficiario final, de manera que las instituciones financieras tengan un mejor conocimiento de los mismos, así como de su perfil transaccional.

La transparencia es un elemento fundamental en los mercados. Por eso, se ha buscado mejorar la calidad y la oportunidad de la información que debe ser revelada y puesta a disposición de todos los participantes del sistema.

En particular, se avanzó en esta materia al exigirle a los bancos y a las sociedades controladoras de grupos financieros, revelar una mayor cantidad de información de carácter cualitativo y cuantitativo, la cual se difunde periódicamente a través de las páginas de Internet de los propios intermediarios.

Aunado a lo anterior, la Comisión pone a disposición del público, a través de su sitio de Internet, gran parte de la información recibida a través de los reportes regulatorios, procedente de las entidades supervisadas.

Como todos sabemos, la información financiera que se produce debe ser completa, confiable, oportuna y a la vez comparable. Por esta razón, dimos nuestro apoyo para la creación y puesta en funcionamiento del *Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera*, que se constituye como un cuerpo especializado e independiente que emite principios contables y que, junto con nosotros, impulsa el proceso de convergencia de los Criterios de Contabilidad Generalmente Aceptados, con las normas internacionales dictadas en esta materia.

Por otra parte, estamos próximos a emitir nuevos criterios aplicables a los bancos y a otros intermediarios financieros, a efecto de actualizar el tratamiento de las operaciones especializadas que realizan cada uno de ellos. Dichos criterios buscarán ser consistentes, en la medida de lo posible, con los emitidos por organismos internacionales especializados.

La competencia es el mecanismo idóneo para eficientar la forma en la que opera nuestro mercado. De ahí, que el diseño y la arquitectura de nuestro sistema, se fundamente en la creación de distintos tipos de intermediarios, ofreciendo alternativas adecuadas a oferentes y demandantes de fondos prestables.

En concordancia, la regulación secundaria emitida ha procurado reducir las barreras de entrada para los nuevos participantes, estableciendo simultáneamente, un tratamiento igual para operaciones similares celebradas por las distintas entidades financieras, reduciendo así, la posibilidad de que se presente arbitraje regulatorio.

Como ejemplo de esta apertura, conviene mencionar que desde 1994 y hasta 2002, no se otorgó ninguna autorización para el establecimiento de nuevos bancos. Sin embargo, a partir de ese año, se reinició el proceso de otorgamiento de dichas autorizaciones. Hoy día, contamos con 3 y se estudian solicitudes de 10 adicionales.

La competencia de mercado ha beneficiado a los cuentahabientes y a los acreditados, movilizando recursos financieros a través de la intermediación, propiciando la innovación de productos y servicios, además de la reducción de costos.

No obstante lo anterior, el tamaño de la economía de nuestro país hace necesario que los servicios bancarios permeen a un porcentaje mayor de la población; por lo que se deberá seguir trabajando mucho más intensamente en una creciente bancarización.

También, se debe buscar otorgar crédito a aquellos sectores que a la fecha no han sido atendidos o bien, no han sido atendidos debidamente. Tal es el caso de las pequeñas y medianas empresas.

En virtud de que el riesgo está en el centro de toda actividad financiera, se han emitido nuevas disposiciones para su administración integral, haciendo obligatoria su revelación, incluyendo la relacionada con las políticas y las metodologías utilizadas para su evaluación y control.

Asimismo, la normatividad vigente requiere del establecimiento de dos unidades especializadas; por una parte, está el *comité de administración de riesgos*, el cual está encargado de medir y evaluar los riesgos en que incurre la institución, así como de aplicar las políticas y límites aprobados por el Consejo de Administración en esta materia; y por la otra, está el *comité de auditoría*, encargado de evaluar, al menos una vez al año, los procedimientos y las políticas que sigue el banco en materia de control interno, cerciorándose de que éstas sean aplicadas adecuadamente.

Como sucede en el resto del mundo, el uso del Internet y la banca electrónica, como medios para celebrar operaciones se ha incrementado de manera notable. De hecho, en nuestro país, las operaciones bancarias a través de estos medios experimentaron un crecimiento exponencial en los últimos años. A fin de atender esto, recientemente se emitió una nueva regla con objeto de preservar la confidencialidad, integridad y seguridad de la información intercambiada, ayudando así, a prevenir el preocupante fenómeno de fraudes que se cometen en contra de las instituciones y sus clientes.

Reconociendo la enorme importancia que tienen las áreas de tecnología de información y de sistemas automatizados en la banca, la Comisión procedió a fortalecer su supervisión, ampliando el alcance y profundidad con la que realiza sus visitas.

A continuación, me gustaría comentarles sobre los principales cambios que hemos impulsado dentro de la Comisión, a efecto de mejorar los diversos servicios que prestamos a las entidades supervisadas, como parte de nuestro mandato institucional.

La calidad de la supervisión ha sido una de nuestras ocupaciones prioritarias. En este sentido, durante los últimos años hemos logrado que los procesos de supervisión que seguimos y las metodologías aplicadas, se lleven a cabo de manera homogénea, con mayores niveles de calidad.

También se ha buscado disminuir la carga y los costos regulatorios. De esta forma, se procedió a revisar el conjunto de reportes que se solicitan, con objeto de eliminar de ellos aquella información que se duplicaba o que carecía de valor, buscando en este proceso, el permitir que la misma pudiera ser compartida simultáneamente por la Secretaría de Hacienda y por el Banco de México. Como resultado de este trabajo, se logró una reducción de aproximadamente 30%, respecto de la originalmente requerida.

Debo señalar con claridad, que esta reducción no ha implicado un relajamiento de la regulación y la supervisión, ni ha significado una pérdida de información sensible.

Es igualmente relevante mencionar, que la Comisión ha encaminado sus esfuerzos a aplicar un modelo de supervisión basado en riesgos, así como al fortalecimiento de nuestros esquemas de supervisión consolidada, con el objeto de conocer con mayor profundidad, la gestión de los grupos financieros. Esto, nos permitirá distribuir y asignar nuestros recursos y capacidades de supervisión, de manera más eficiente en correspondencia con los riesgos que enfrentan los intermediarios financieros.

Los programas permanentes de capacitación de nuestro personal, ha sido otra de las estrategias que hemos venido utilizando para mejorar la calidad del análisis que llevamos a cabo y, en consecuencia, de la supervisión. Estos programas permiten que los supervisores e inspectores adquieran conocimientos y experiencia especializada. Muchos de estos cursos de capacitación se han podido llevar a cabo gracias a la colaboración y cooperación que hemos alcanzado con los supervisores bancarios de otros países.

Para complementar estos esfuerzos institucionales, se ha avanzado en la implementación de un servicio profesional de carrera, mediante el cual se da certeza, confianza y continuidad al personal que labora en la Comisión. Asimismo, se han instrumentado las medidas necesarias que permitan ofrecer a todos los funcionarios de la CNBV la protección legal que requieran, en caso de que se presenten acciones legales en su contra por el debido ejercicio de sus funciones.

Es de resaltarse, la alta calidad profesional de nuestro personal y la ética con la que se conducen. Ambas condiciones son indispensables para poder enfrentar la responsabilidad que les ha sido conferida.

La madurez de nuestra organización, aunada a los avances institucionales que se han logrado en los últimos años, nos permitirán cerrar un ciclo con una Comisión bien estructurada, sólida y moderna, que cuenta con una clara visión del futuro y del sistema bancario mexicano que queremos, y que en su actuar diario, brinde confianza al mercado, a los ahorradores y a la sociedad en su conjunto.

La Comisión también ha participado muy activamente en el plano internacional. La globalización de las actividades financieras y la presencia significativa de

instituciones financieras internacionales en nuestro país, así lo han hecho necesario.

Hemos establecido vínculos más estrechos con organismos internacionales de supervisión, así como con autoridades de otros países con las que hemos negociado y suscrito diversos acuerdos de cooperación e intercambio de información, tanto a nivel bilateral como multilateral, lo que nos ha facilitado el poder realizar una supervisión transfronteriza cada vez más efectiva y mejor coordinada.

Las transformaciones logradas dentro de la Comisión y la solidez del sistema bancario del país, ya han sido reconocidas en el ámbito internacional. Prueba de ello, fueron los resultados positivos recientemente obtenidos en el *Programa de Evaluación del Sector Financiero* realizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En el plano institucional, se ha dedicado el tiempo necesario para analizar con detalle la mejor manera de distribuir las responsabilidades que el marco legal le asigna a la Secretaría de Hacienda, así como a la Comisión.

Actualmente, la Secretaría es responsable de autorizar y revocar a los bancos y a otros intermediarios financieros, mientras que la Comisión lo es de regular y supervisar a dichas entidades. En consecuencia, hemos coincidido en la conveniencia de modificar este arreglo institucional, transfiriendo las facultades de autorización y revocación de la Secretaría, hacia la Comisión.

Bajo este escenario, la realineación de facultades no implicaría alterar el papel que juega la Secretaría como la responsable de diseñar las políticas públicas incluyendo, la arquitectura de nuestro sistema financiero, dejándole a la Comisión el ciclo completo de vida del intermediario, en cuanto a su regulación y supervisión se refiere, reduciendo con ello tanto los tiempos de atención a los bancos, como los costos inherentes.

Permítanme ahora, presentarles los retos inmediatos que tenemos en nuestra agenda:

Con relación a la implementación de Basilea II en México, las autoridades financieras y los bancos que operan en el país, hemos coincidido en la importancia de adoptar el Nuevo Acuerdo de Capital en tiempos similares a los propuestos por el Comité de Basilea, estableciendo una agenda común de trabajo.

En el caso del riesgo de crédito, se prevé que todos los bancos avancen en el uso del Enfoque Estándar, aunque algunos podrían incluso, adoptar modelos internos.

En cuanto al riesgo operacional, se espera que todos los bancos adopten el Enfoque Estándar.

La comunicación y la cooperación han sido y seguirán siendo esenciales para la exitosa implementación de Basilea II en todas las jurisdicciones. Por ello, continuaremos trabajando tanto con la industria, como con los supervisores de los países de origen, estableciendo prioridades y un calendario con los tiempos adecuados para lograr la adopción ordenada del Nuevo Acuerdo de Capital.

La crisis financiera de 1994-1995, nos dejó muchas lecciones, en particular las relacionadas con la necesidad de contar con mecanismos para detectar oportunamente los signos de debilidad que muestran los bancos y poder responder a tiempo con medidas preventivas, que tiendan a restablecer su salud financiera y disminuyan los riesgos de contagio sobre otras instituciones.

También aprendimos que es indispensable el poder contar con un apropiado régimen regulatorio, que les permita a las autoridades financieras y al IPAB, actuar con rapidez para hacer frente a las insolvencias; mejorar la protección ofrecida a los ahorradores; y reducir al mínimo los costos fiscales en los que, en dado caso, tendría que incurrir el gobierno federal de presentarse una crisis bancaria.

Es por ello, que seguiremos dándole prioridad a la adopción de un moderno régimen de resoluciones bancarias, incluyendo una ley especial de quiebras.

Por otra parte quisiera, como lo he hecho en muchas ocasiones anteriores, hablar de la necesidad apremiante que se tiene de fortalecer la autonomía institucional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Hasta ahora, la Comisión ha gozado de autonomía técnica para cumplir con su misión institucional; es decir, ha venido realizando sus funciones de supervisión de forma independiente, sin requerir de asistencia externa. Sin embargo, existen otros dos pilares sobre los cuales debe descansar la autonomía.

El primero es en el ámbito presupuestal. Actualmente, la Comisión cobra derechos a las entidades financieras por concepto de los servicios de supervisión que realiza. Dichos fondos son enterados al día siguiente que se causan a la Tesorería de la Federación. Por contraparte, como cualquier otra

unidad administrativa del gobierno federal, la CNBV ejerce el presupuesto de egresos que le ha sido asignado, con base en los montos aprobados por la Cámara de Diputados. En este sentido, sería deseable que la Comisión tuviera la certeza de contar con los fondos requeridos haciéndose responsable de administrar sus ingresos autogenerados y con base en ellos, ejercer su gasto de una manera transparente y dentro de un marco de amplia rendición de cuentas sobre su uso.

El segundo pilar, tiene que ver con la necesidad de dotar de un periodo de permanencia fijo al supervisor. La experiencia internacional ha demostrado ampliamente las ventajas que se obtienen cuando los responsables de dirigir los organismos de supervisión, cuentan con un plazo determinado para realizar su trabajo, aislándolos de facto, de los riesgos derivados de su actuar; esto es, blindándolos contra posibles interferencias políticas o presiones externas.

Confiamos en poder seguir avanzando en el tema de la autonomía de la Comisión, en línea con las mejores prácticas y experiencias internacionales en la materia.

Finalmente, queremos proponer la creación de órganos jurisdiccionales especializados. Como todos sabemos, en la actualidad carecemos de jueces que tengan el conocimiento necesario para atender y resolver de manera efectiva, sobre las controversias en materia financiera que se les presenten. De nada sirven las mejores leyes y normas, si no podemos hacer que las mismas se cumplan.

Señoras y señores:

Ninguna sociedad que aspire a mejorar su calidad de vida, a crear más empleos, y a sentar las bases para un futuro más estable, puede prescindir de contar con un sistema bancario sólido y eficaz.

Los mexicanos hemos avanzado en esta tarea. El sistema bancario del país se encuentra en uno de sus mejores momentos. Contamos también con los mecanismos de regulación y supervisión necesarios, para asegurar el estable y ordenado desarrollo del sector.

La banca, deberá por lo tanto, asumir plenamente su responsabilidad en el desarrollo nacional.

Muchas gracias.